



## FORO INTERNACIONAL PARLAMENTARIO

### Congreso Mundial de las Familias - Madrid, 25 de mayo de 2012

**Dr. Esteban Rodríguez**

**Ginecólogos Derecho a Vivir (España)**



No entenderemos del todo el problema del aborto si no abordamos el papel de los médicos y la Medicina. La mujer es un cooperador pasivo del aborto quirúrgico, los que realizan la acción homicida son, hoy por hoy, médicos -o curanderos- que son responsables de la muerte de más de 42 millones de seres humanos al año en el mundo según cifras de la OMS.

La situación global del aborto en los países industrializados es, precisamente, la de la industrialización del aborto realizada en el ámbito de la industria sanitaria. El aborto ha sido convertido en prestación de salud y transformado en un acto médico. La tendencia es a expandir a países en desarrollo esta prestación. Este ha sido el empeño y el logro de la agenda prochoice, es lo que yo he llamado la "sanitarización del homicidio o healthy murder". Sin embargo esto es contrario a la función social de la medicina y a la ética y deontología médicas.

Para conseguir esto la agenda abortista ha impuesto el concepto del aborto seguro y ha creado la necesidad de proporcionar abortos seguros en todo el mundo. Para ellos el aborto seguro es el que es legal y es realizado en un ámbito clínico. Sistemáticamente se ha omitido el hecho científico de que un aborto es inseguro para la persona en gestación que resulta destruida y para la salud mental de la mujer, para su futuro reproductor e incluso para su salud física aun cuando es practicado por médicos y en condiciones higiénicas

Por tanto, si el logro de la agencia abortista ha sido la "sanitarización" del crimen el objetivo de la agenda prochoice debe ser la "desanitarización" del crimen.



Creo que la forma de combatir esta situación es trabajar por la segregación de la muerte intencionada del ámbito de la medicina, pública o privada. Es tarea de los políticos orientar sus esfuerzos en esta dirección. Conseguir eliminar el aborto, o cualquier otra forma de destrucción de la vida humana del ámbito sanitario haría una gran mella a los intereses de la industria contraceptiva y abortiva.

Para ello mi propuesta es:

-Reducir, hasta su supresión total, la financiación pública de abortos y contraceptivos ( acción anti Obama care).

-Excluir de los hospitales y centros sanitarios públicos las prácticas abortivas y aquellas que puedan causar la muerte de seres humanos concebidos.

-Suprimir las políticas sanitarias destinadas a los cribados prenatales de Síndrome de Down y demás cromosopatías.

-Legislar y aportar ayudas económicas a los padres de un hijo nacido con discapacidad para evitar indemnizaciones judicializadas que penan a los médicos y a sus seguros de responsabilidad civil ante el nacimiento de estas personas. Prohibir todo tipo de diagnostico prenatal de utilidad eugenésica y desterrar el uso del término de aborto terapéutico o por causas médicas.

-Legislar la protección de la vida de todo concebido, penando a los ciudadanos que causen la muerte de seres humanos en desarrollo ya sea de manera clandestina o de manera higiénica. Entender que cualquier fármaco biocida suministrado con la intención de destruir una vida debe ser catalogado como arma química y su comercialización debe ser ilegalizada.

- Entre tanto no exista la protección penal de la vida de todo concebido y la sociedad demande como derecho la destrucción de determinadas vidas humanas:

Creación de centros, que no deberán llamarse clínicas, y que en condiciones higiénicas ejecuten los abortos legales. Esta deberá ser la única competencia de estos centros y no será compatible con la prestación de servicios médicos ginecológicos. Deben depender del Ministerio de Justicia y no del de Sanidad. Deben ser objeto de inspecciones continuas tanto fiscales como administrativas como de higiene para detectar todo fraude de ley.



El personal que trabaje en dichos centros deberá ser acreditado por los ministerios o departamentos de justicia y no por los de sanidad. Si fueran licenciados en medicina o especialistas en ginecología se debe regular por ley que tales trabajadores declaren por escrito su disponibilidad para practicar los abortos legalizados y elaborar una ley que declare la incompatibilidad del ejercicio de la abortología con el ejercicio de la medicina.

La responsabilidad de la formación de abortólogos dependerá de los propios centros de abortos y será supervisada por técnicos del Ministerio de Justicia.

***Dr. Esteban Rodríguez.***

***Ginecólogos Derecho a Vivir (España)***

